CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE**Secretaría General**

Notificación de la resolución del consejero de Medio Ambiente de 14 de agosto de 2009 por la que se pone fin y se ordena el archivo del expediente sancionador número SPC/ES-11/09, seguido a don Gerardo Gabino del Toro Hospital.

Habiendo resultado imposible practicar a través del Servicio de Correos la notificación del expediente sancionador de referencia a don Gerardo Gabino del Toro Hospital como consecuencia de haber fallecido el presunto sancionado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Bilbao de la resolución del consejero de Medio Ambiente que a continuación se transcribe:

“Visto el expediente sancionador de referencia, seguido en la Dirección General de Medio Ambiente de esta Consejería a don Gerardo Gabino del Toro Hospital, con DNI: 14727883-V, y domicilio en calle Teófilo Guiard n.º 2, puerta Izda., Bilbao (Vizcaya), por infracción a la normativa sobre residuos y vertidos, resulta

Primero: Con fecha 7 de junio de 2009, y tras la realización de las oportunas actuaciones previas, fue dictado el acuerdo de iniciación del citado procedimiento sancionador como consecuencia de la denuncia formulada por la Dirección General de la Guardia Civil, Patrulla SEPRONA de Torrelavega, con entrada en esta Consejería el 23 de julio de 2008, número de registro 12996 por la realización de los siguientes hechos:

“En el lugar, fecha y hora indicados se observa, en la finca señalada en el anexo, la existencia de residuos peligrosos acumulados, tales como garrafas con aceites de motor usados, grasas consistentes y varias garrafas con restos de anticongelantes, así como residuos no peligrosos (neumáticos usados y demás chatarra), todo ello mezclado y a la intemperie, ocupando una esquina de la parcela (se adjunta anexo fotográfico). Realizadas gestiones en las oficinas del excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega, de estas se desprende que el titular de la finca es quien consta en la presente como denunciado”.

Segundo: Los hechos mencionados en el apartado anterior constituyen la infracción descrita en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos como:

- El abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos, (artículo 34.3.l en relación con el apartado 2 b) del mismo artículo de la Ley 10/1998).

Hecho que se tipifica como infracción grave y que podrá sancionarse con multa desde 6.010,13 hasta 300.506,05 euros, al tratarse de residuos peligrosos conforme al artículo 35 b) de la Ley 10/1998. Además de la obligación de reponer o restaurar las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 10/1998, como sí se indicó en el acuerdo de iniciación mencionado.

Tercero: De conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con fecha 14 de julio de 2009, se intentó la notificación al imputado del acuerdo de iniciación, devolviéndose la notificación por el Servicio de Correos por estar fallecido el destinatario.

Vistos los antecedentes mencionados, y considerando el carácter personalísimo del procedimiento sancionador, como así dispone el artículo 130. 1 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, “sólo podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia” y como así corrobora el TS en Sentencia de 20 de septiembre de 1996 al hacer referencia al distinto régimen de transmisibilidad de las sanciones administrativas en el supuesto de disolución de la persona jurídica sancionada que cuando se trata de de la muerte o fallecimiento de la persona física sancionada, porque, “...cuando se trata de la responsabilidad de una persona física derivada de infracciones administrativas, como ocurre en el presente caso, la intransmisibilidad de las sanciones y la extinción de éstas por la muerte del responsable, prevista para las penas en el Código Penal (artículo 112.1 del anterior texto y artículo 130.1 del actual) y para las sanciones en los ámbitos sectoriales más característicos del Derecho administrativo sancionador de nuestro ordenamiento, resulta ineludible para preservar uno de los valores esenciales en que se asienta el ejercicio del “ius puniendo” del Estado, como es el principio de la personalidad de la penas y de la sanciones (STS 8 noviembre 1990 (RJ 1990/8816) y el de la responsabilidad que se asienta en la culpabilidad individual, sin que las sanciones administrativas puedan asimilarse, a estos efectos, a una obligación pecuniaria civil, con independencia de que haya recaído o no resolución sancionadora firme en el momento de producirse la muerte del infractor, ya que tal circunstancia no desvirtúa su naturaleza punitiva”.

De conformidad con la competencia que otorga el artículo 37.1.b), de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos,

RESUELVO

Primero: Declarar el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador SPC/ES – 11/09, seguido a don Gerardo Gabino del Toro Hospital, como consecuencia de haber fallecido el presunto sancionado.”

Santander, 28 de agosto de 2009.—El secretario general, Julio G. García Caloca.

09/13224

CONSEJERÍA DE SANIDAD**Dirección General de Salud Pública**

Notificación de providencia de iniciación de expediente sancionador número 67/09/SAN, en materia de seguridad alimentaria.

Habiéndose intentado por dos veces notificar a doña Josefina Vallines Sánchez, en relación con establecimiento “Bar Los Llaos”, con domicilio en Urb. La Brañona 19, 2.º izda. de Cabezón de la Sal, a través del Servicio de Correos y no habiendo sido posible realizar tal notificación por causas no imputables a esta Administración, se procede de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación del presente edicto:

“Vista el acta de inspección número 25.067, de fecha 27 de febrero de 2009, levantada por inspector de Salud Pública actuante, así como las actuaciones realizadas por el Servicio de Seguridad Alimentaria; y el capítulo VI del Título I de la Ley 14/86, de 25 de abril (BOE del día 29), General de Sanidad; el título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto (BOE del día 9); se procede, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, a la iniciación del oportuno procedimiento sancionador por los siguientes:

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 8 de septiembre de 2008 se gira visita al establecimiento Bar Los Llaos, del que es titular doña Josefa Vallines Sánchez, en el que se constata, acta número 25.041, la tenencia y exposición para la venta de 12 latas de conserva desprovistas de la información obligatoria en el etiquetado, así como de documentación acreditativa de la trazabilidad.

2.- Con motivo de la actuación referida en el párrafo anterior fue dictada resolución de destrucción de la mercancía por el director general de Salud Pública con fecha 14 de octubre de 2008, notificada el 17 de octubre de 2008.

3.- Con fecha 27 de febrero de 2009, acta de inspección número 25.067, se realiza visita de inspección al establecimiento mencionado para proceder a desinmovilizar la mercancía cautelarmente intervenida, indicando a la interesada la obligación de remitir al Servicio de Seguridad Alimentaria el justificante de dicha destrucción en el plazo de diez días.

4.- Transcurrido el plazo otorgado la interesada no aporta la documentación requerida.

2. HECHOS

La inspección ha podido comprobar que no se aporta la documentación requerida justificativa de la destrucción de la mercancía intervenida.

3. NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS

Se incumple el artículo 4.1.3 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

4. TIPIFICACIÓN

Los hechos descritos pueden ser constitutivos de una infracción antirreglamentaria prevista el artículo 4.1.3 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

La infracción descrita podrá ser sancionada con multa de hasta 601,01 euros de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

5. COMPETENCIA

1.- En virtud de la calificación inicial máxima asignada a la infracción administrativa supuestamente cometida, sería el director general de Salud Pública el órgano competente para dictar la resolución que corresponda en el presente procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se nombra como instructora para la tramitación del expediente a doña Marta Malo Mateo, jefa de Sección de Gestión de Higiene Alimentaria de la Consejería de Sanidad, quien podrá ser objeto de recusación de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

6. TERMINACIÓN ANTICIPADA

1.- Según lo previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/93, en caso de reconocimiento espontáneo de la responsabilidad por parte de la empresa infractora, el pro-

cedimiento podrá ser resuelto directamente con la imposición de la sanción que proceda, la cual será modulada por tal circunstancia.

2.- En los demás supuestos esta Administración dispone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3.a) de la Ley 30/1992, de un plazo de seis meses, a contar desde la fecha del presente acuerdo de incoación, para notificar a los interesados la resolución que debe ser dictada en el presente procedimiento. Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento y archivo del expediente.

7. NOTIFICACIONES

1.- Comuníquese el presente acuerdo al instructor del procedimiento, dándole traslado de las actuaciones a los efectos procedentes.

2.- Se informa a la empresa expedientada que dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción de este escrito, para aportar cuantas alegaciones y documentos considere oportunos o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

3.- El expediente queda, desde ahora, puesto de manifiesto a la interesada advirtiéndole que, en el supuesto de que no sean efectuados descargos al contenido de esta providencia de iniciación, la misma podrá ser considerada como propuesta de resolución.

Santander 10 de julio de 2009.—El director general de Salud Pública, Santiago Rodríguez Gil.

Santander, 25 de agosto de 2009.—El jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria, Miguel del Valle González.
09/13189

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección General de Salud Pública

Notificación de resolución de expediente sancionador 28/09/SAN en materia de seguridad alimentaria.

Habiéndose intentado por dos veces notificar a Comercial Pozomonte S.L, en relación con establecimiento "Panadería Chuscos", con domicilio en calle Fernando de los Ríos 1-B de Santander (Cantabria), a través del Servicio de Correos y no habiendo sido posible realizar tal notificación por causas no imputables a esta Administración, se procede de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación del presente edicto:

"Vistas las actuaciones llevadas a cabo por el personal del Servicio de Seguridad Alimentaria correspondientes al procedimiento sancionador de referencia, iniciado de oficio y los documentos incorporados al expediente número 28/09/SAN, y considerando los siguientes:

1. ANTECEDENTES Y HECHOS IMPUTADOS.

1.- Se giran visitas por la Inspección de Salud Pública, con fechas 24 de enero y 16 de mayo de 2008 al establecimiento de referencia, titularidad de la interesada, sito en la localidad de Santander. Del resultado de dichas visitas se levantaron actas números 16.642 y 23.448, respectivamente, que dieron lugar al procedimiento sancionador 82/08/SAN que finalizó con resolución sancionadora de fecha 7 de enero de 2009 por la comisión de dos infracciones administrativas leves relativas a la documentación y registros del Sistema de Análisis de Puntos de Control Críticos (APPCC) y condiciones higiénico y estructurales de los locales y equipos ("mosquiteras del obrador tapadas de polvo").

2.- En fecha 26 de mayo de 2008 la interesada presenta nueva solicitud de convalidación en el Registro Auxiliar de la Secretaría General de esta Consejería de Sanidad